



---

Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

**SEXTA SALA UNITARIA**

**JUICIO ADMINISTRATIVO: 195/2017**

**ACTOR RECURRENTE: \*\*\***

**AUTORIDADES DEMANDADAS:** JEFE DE LA OFICINA DE RECAUDACIÓN FISCAL 001 DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y OTRAS

**MAGISTRADO PONENTE: AVELINO BRAVO CACHO**

**SECRETARIO PROYECTISTA:** JOSÉ PEDRO BAUTISTA GONZÁLEZ

**GUADALAJARA, JALISCO, A VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO.**

**VISTOS** los autos para resolver el recurso de reclamación interpuesto por la parte actora en contra del **acuerdo del doce de junio de dos mil diecisiete**, dictado por el Magistrado Presidente de la Sexta Sala Unitaria de este Tribunal, en el expediente 195/2017, y de acuerdo con los siguientes:

**ANTECEDENTES**

1. La parte actora presentó demanda en la que impugnó las sanciones de multas por infracciones en materia de movilidad emitidas por diversas autoridades, y en relación a distintos vehículos, lo anterior, una vez que realizó el pago de las multas anotadas. La Sala Unitaria admitió parcialmente la demanda y respecto de ciertos actos, previó a proveer sobre la admisión de la demanda, le requirió al actor por que acreditara su interés jurídico mediante la demostración de que es propietario de los vehículos respecto de los que se determinaron las sanciones impugnadas. El actor presentó escrito en que pretendió atender el requerimiento, y la Sala Unitaria desechó la parcialmente la demanda toda vez que estimó que el actor no demostró su interés jurídico. Inconforme con esa determinación, el demandante interpuso el presente recurso de reclamación.

2. Por oficio 144/2021 del Secretario General de este Tribunal, se remitió el día quince de febrero de dos mil veintiuno este recurso de reclamación a la Primera Ponencia, bajo la titularidad del Magistrado



---

**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

Avelino Bravo Cacho, para que elaborara el proyecto de resolución correspondiente.

### **I. COMPETENCIA**

3. Esta Sala Superior es competente para conocer del recurso de reclamación en términos de lo dispuesto por el artículo 8 fracción I de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, 89, fracción IV, y 93 de la Ley de Justicia Administrativa, todos del estado de Jalisco, pues dicho recurso se endereza contra un acuerdo de sala unitaria que desechó parcialmente la demanda.

### **II. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD**

4. El recurso de reclamación es presentado por parte legitimada pues lo interpuso el abogado patrono de la parte actora, en términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa; además que fue presentado oportunamente en la Oficialía de Partes de este Tribunal, en el quinto día del plazo de cinco días hábiles dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco.

### **III. PROCEDENCIA**

5. Esta Sala Superior no advierte que en la especie se actualice en forma indudable y manifiesta alguna causa de desechamiento del recurso, por lo que se estima procedente el mismo, pues como se informó con antelación, este fue presentado por parte legitimada, en contra de un acuerdo por el que se desechó parcialmente la demanda, dictada aquella por una sala unitaria de este Tribunal, además de haberse presentado oportunamente en el plazo previsto para recurrir esa determinación.

### **IV. MATERIA DEL RECURSO**

6. El actor sostiene en su primer agravio, que el acuerdo recurrido es ilegal en la medida que, para admitir la demanda, le exigió que demostrara su interés jurídico a través de acreditar ser propietario de los vehículos en relación a los cuales se dictaron las sanciones por infracciones viales impugnadas, pues la Sala Unitaria consideró que tal requisito no se satisface con la exhibición de las solicitudes de copias



---

**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

certificadas de los actos impugnados, pues en estas peticiones no constan los actos impugnados, por lo que no se colma el requisito del artículo 36, fracción III, de la Ley de Justicia Administrativa, a la vez que los recibos de pago de las multas impugnadas solo son documentos que demuestran el cumplimiento de una obligación fiscal pero insuficientes para demostrar el interés jurídico.

7. Así, sostiene el recurrente, el acuerdo reclamado es incorrecto toda vez que considera que el interés jurídico solo puede demostrarse mediante la exhibición junto a la demanda, del original o copia certificada de los documentos que reconozcan al actor como propietario o responsable de la movilización terrestre de los vehículos, lo que es contrario a derecho según lo manifiesta el actor, toda vez que el interés jurídico es el derecho subjetivo de los particulares para impugnar judicialmente los actos que violen los derechos humanos, ocasionando un perjuicio en sus derechos o intereses, lo que en la especie se acredita con los recibos oficiales de pago de las multas impugnadas, pues con ellos se demuestra la existencia de un menoscabo en el patrimonio del accionante, \*\*\*.

8. A lo anterior, aduce en su segundo agravio, se suma la condición de que el actor manifiesta que desconoce lisa y llanamente el contenido de los actos impugnados, no obstante haber solicitado copias certificadas de los mismos, las cuales no le han sido entregadas.

9. Los agravios expuestos, son esencialmente fundados.

10. Lo anterior es así, en tanto que la demanda de juicio en materia administrativa debe admitirse a menos que se actualice una causa de improcedencia manifiesta e indudable que emane de la misma o de sus anexos, toda vez que el magistrado de la sala unitaria, al dictar el auto inicial de trámite, se encuentra impedido para analizar exhaustivamente el acto impugnado.

11. En ese sentido, dicho juzgador carece de facultades para desechar de plano la demanda promovida bajo la consideración de que el actor carece de interés jurídico toda vez que para arribar a tal conclusión, se debe realizar un estudio informado, completo y fehaciente del acto impugnado, lo cual es propio de la sentencia que dicte en el fondo del asunto, considerando para tal efecto los escritos y pruebas aportadas



**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

por las partes durante la secuela procesal. De ahí que debe admitir la demanda pues en esa etapa procesal carece de los elementos necesarios para efectuar aquel análisis en la forma precisada, salvo que de lo manifestado por el accionante se desprenda el reconocimiento de tal condición.

12. En este sentido, debe acotarse que el juicio en materia administrativa se desarrolla en diversas etapas las cuales se agotan cada una de acuerdo con las reglas y constancias que obren en el expediente respectivo, por lo que:

I. El juicio inicia con la presentación de la demanda, la cual debe contener diversos requisitos y se le deben anexar los documentos correspondientes;<sup>1</sup>

II. En su caso, si al examinarse la demanda se advierte que ésta es oscura, irregular o incompleta, o que no se adjuntaron los documentos necesarios, se requerirá al demandante para que dentro del término de tres días la aclare, corrija, complete o exhiba los documentos

<sup>1</sup> Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco.

*Artículo 31. La demanda se presentará directamente ante la sala competente o se podrá enviar por correo registrado si el actor tiene su domicilio legal en lugar distinto al de la residencia de la Sala. Se tendrá como fecha de recepción del escrito respectivo, en este último caso, la de su depósito en la oficina postal.*

*La presentación deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado o a aquél en que se haya tenido conocimiento del mismo.*

*Artículo 35. La demanda deberá contener:*

*I. El nombre del demandante y su domicilio para recibir notificaciones;*

*II. El señalamiento de la resolución o acto administrativo que se impugna;*

*III. La autoridad o autoridades demandadas, o el nombre y domicilio del particular demandado cuando el juicio sea promovido por la autoridad administrativa;*

*IV. Los hechos que dieron origen al acto que se impugna;*

*V. La fecha en la que se tuvo conocimiento de la resolución o acto impugnado;*

*VI. La expresión de los conceptos de impugnación que se hagan valer;*

*VII. El nombre y domicilio del tercero interesado cuando lo haya; y*

*VIII. La enumeración de las pruebas que ofrezca, las que deberán relacionarse con los hechos en los que se funda la demanda.*

*En caso de que se ofrezca prueba pericial, de inspección judicial o testimonial, se precisarán los hechos sobre los que deben versar y se señalarán los nombres y domicilios del perito o de los testigos en su caso.*

*Artículo 36. El demandante deberá adjuntar a su demanda:*

*I. Una copia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las partes;*

*II. El documento que acredite su personalidad o en el que conste que le fue reconocida por la autoridad demandada, cuando no gestione en nombre propio;*

*III. El documento en que conste el acto impugnado o, en su caso, copia de la instancia no resuelta por la autoridad;*

*IV. El cuestionario para los peritos cuando se ofrezca prueba pericial;*

*V. Las pruebas documentales que ofrezca; y*

*VI. Constancia de la notificación del acto impugnado, excepto cuando el demandante declare, bajo protesta de decir verdad, que no recibió constancia; cuando hubiere sido por correo o bien cuando hubiere tenido conocimiento de la misma sin mediar notificación. Si la notificación fue por edictos, deberá señalar la fecha de la última publicación y el nombre del órgano en que ésta se hizo.*

*Cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante o cuando no hubiera podido obtenerlas, a pesar de tratarse de documentos que legalmente se encuentren a su disposición, éste deberá señalar el archivo o lugar en que se hallen para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión, cuando ésta sea legalmente posible. Para ese efecto, deberá identificar con toda precisión los documentos y, tratándose de los que pueda tener a su disposición, bastará con que se acompañe copia de la solicitud debidamente presentada. Se entiende que el demandante tiene a su disposición los documentos, cuando legalmente pueda obtener copia autorizada de los originales o de las constancias. En ningún caso se requerirá el envío de un expediente administrativo.*

*Si el acto impugnado no constare documentalmente el actor lo manifestará así, bajo protesta formal de decir verdad, y ofrecerá los elementos de prueba mediante los cuales acredite la existencia del acto impugnado.*

*Si los documentos a que se refiere el presente artículo excedieren de cincuenta fojas, quedarán en la secretaría para que se instruyan de ellos las partes y sólo subsistirá la obligación de presentar copia del escrito.*



---

**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

aludidos, apercibiéndolo de que de no hacerlo se desechará de plano la demanda o se tendrán por no ofrecidas las pruebas;<sup>2</sup>

III. Cumplimentado el requerimiento, en su caso, el acuerdo admisorio debe dictarse dentro de los tres días siguientes a la fecha de presentación de la demanda o del cumplimiento referido en el punto anterior, proveyendo sobre las pruebas ofrecidas y, en su caso, dictando las providencias necesarias para su desahogo, además de resolver sobre la intervención del coadyuvante o del tercero.<sup>3</sup> Igualmente, en caso de así haberlo solicitado la parte actora, se proveerá respecto a la suspensión de la resolución o del acto administrativo impugnado.<sup>4</sup>

13. Como se observa de lo expuesto, en el acuerdo de admisión de la demanda, la sala unitaria se encuentra constreñida a resolver con las constancias que en esa etapa procesal obren en el expediente, por lo que el análisis de la demanda y sus anexos debe realizarse en forma menos intensa que la requerida en la resolución del asunto de fondo.

14. Lo anterior es así pues, si bien conforme al artículo 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, el juicio es improcedente cuando los actos impugnados no afecten los intereses jurídicos del demandante o que se hayan consumado de un modo irreparable, el análisis de dicha cuestión no es propia del auto inicial mediante un estudio profundo de la materia del juicio a fin de fundar la actualización de las causas de improcedencia, pues estas deben considerarse en esta etapa del proceso únicamente si se surten en forma manifiesta e indudable, mediante una verificación provisional y de menor intensidad, ajustándose especialmente a los requisitos previstos en el artículo 35 de la Ley de Justicia Administrativa.

15. En este sentido, debe señalarse que la consideración de «*motivo manifiesto e indudable de improcedencia*» a que se refiere el artículo 41 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa, que permite desechar de plano la demanda, debe advertirse del escrito respectivo y de las

---

2 Ibid. Artículo 37. Si al examinarse la demanda se advierte que ésta es oscura, irregular o incompleta, o que no se adjuntaron los documentos señalados en el artículo precedente, se requerirá al demandante para que dentro del término de tres días la aclare, corrija, complete o exhiba los documentos aludidos, apercibiéndolo de que de no hacerlo se desechará de plano la demanda o se tendrán por no ofrecidas las pruebas, en su caso.

3 Ibid. Artículo 39. La demanda se admitirá dentro de los tres días siguientes al de su presentación. En el auto que la admita en definitiva, se admitirán o desecharán las pruebas ofrecidas y, en su caso, se dictarán las providencias necesarias para su desahogo y se aceptará o rechazará la intervención del coadyuvante o del tercero.

4 Ibid. Artículo 66. La suspensión de la resolución o del acto administrativo, podrá concederse de oficio, en el mismo auto en que admita la demanda, cuando el acto o resolución impugnado, de llegar a consumarse, dificultaría restituir al particular en el goce de su derecho. El auto que decreta la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento.





pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de estudio, y sin que exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada; de lo contrario, la demanda deberá ser admitida, ya que dicho motivo puede ser desvirtuado durante el procedimiento, pues, de no ser así se dejaría al promovente en estado de indefensión, al no darle la oportunidad de allegar al Tribunal los elementos de convicción que justifiquen el ejercicio de su acción.

16. Las consideraciones referidas encuentran respaldo interpretativo en cuanto a la naturaleza y alcances de los acuerdos iniciales del juicio en materia administrativa, en la interpretación que en la materia de las controversias constitucionales ha emitido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el procedimiento que rige dicha etapa de ambos juicios es esencialmente similar, por lo que al efecto se estima aplicable por analogía la tesis 1a. XLIV/2002,<sup>5</sup> cuyo título y contenido se exponen a continuación:

*«CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FALTA DE AFECTACIÓN AL INTERÉS DEL ACTOR, AL CONSTITUIR UNA CUESTIÓN DE FONDO QUE NO PUEDE SER ANALIZADA AL PRESENTARSE LA DEMANDA, NO ES MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que permite desechar de plano la demanda de controversia constitucional presentada, debe advertirse del escrito respectivo y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada; de lo contrario, la demanda deberá ser admitida, ya que dicho motivo puede ser desvirtuado durante el procedimiento, pues, de no ser así se dejaría al promovente en estado de indefensión, al no darle la oportunidad de allegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los elementos de convicción que justifiquen el ejercicio de su acción. En congruencia con lo anterior, se concluye que la falta de afectación al interés de la parte actora al momento de promover la controversia constitucional no es motivo manifiesto e indudable de improcedencia, pues aquel*

---

5 [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XV, Junio de 2002; Pág. 431. 1a. XLIV/2002.



---

Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

*supuesto constituye una cuestión de fondo que no puede ser analizada al presentarse la demanda, sino que es susceptible de justificación durante la tramitación del juicio respectivo, ya que el auto inicial por el que se admite o desecha aquélla reviste el carácter de mero trámite en el que no se pueden esbozar consideraciones que impliquen el análisis de cuestiones de fondo del asunto o el estudio concienzudo de éste, propio de una resolución y no de un acuerdo; de ahí que deba darse oportunidad al actor para que en el transcurso del procedimiento, en su caso, mediante las pruebas correspondientes acredite la referida afectación.»*

17. Lo anterior no causa perjuicio alguno a las demandadas pues en la secuela procesal podrán manifestar sus excepciones y ofrecer las pruebas conducentes, de tal forma que si efectivamente se actualiza la causa de improcedencia manifestada por aquellas, la Sala Unitaria podrá resolver al respecto en el fondo de la litis planteada.

18. **Ahora bien, en relación con los agravios analizados, estos se estiman esencialmente fundados** pues en la especie, no se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia del juicio, prevista por el artículo 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, a saber, que los actos no causen afectación al interés jurídico del actor.

19. Lo anterior es así, pues conforme al artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa, en el juicio solo podrán intervenir las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión.<sup>6</sup>

20. En este sentido, el interés jurídico es el presupuesto procesal cuya acreditación demuestra la afectación al actor en sus derechos jurídicamente tutelados, lo que se corresponde con el derecho subjetivo, entendiendo este último como la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho y supone la conjunción de esa facultad y un correlativo deber jurídico de cumplirla.

21. Al efecto, resulta aplicable la tesis III.2o.A.13 A (10a.) de título y subtítulo «*JUICIO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. NO BASTA CON UN INTERÉS LEGÍTIMO PARA SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE*

---

6 LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO

«Artículo 4. Sólo podrán intervenir en el juicio las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión.»



JALISCO)»,<sup>7</sup> cuyas consideraciones interpretativas son ilustrativas en cuanto se refieren al concepto de «interés jurídico» de la Ley de Justicia Administrativa, las cuales se citan a continuación:

*«Conforme a los artículos 4 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, el interés jurídico para acceder al juicio en materia administrativa es uno de los presupuestos procesales que deben verificarse y acreditarse dentro del procedimiento relativo, a fin de obtener un pronunciamiento respecto al fondo del asunto. Así, tal supuesto debe ser entendido bajo dos elementos: el acreditamiento y la afectación, los cuales necesariamente deben conjugarse, porque es factible ostentarse titular de determinado derecho, pero éste no verse afectado por los órganos del Estado o, en su caso, disfrutar de ese derecho y no tener el respaldo legal sobre él. Lo anterior denota que el interés jurídico tiene una connotación diversa a la del interés legítimo, pues mientras el primero requiere que se acredite la afectación a un derecho subjetivo, el segundo supone únicamente la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de los actos impugnados. Por tanto, no basta con un interés legítimo para la procedencia del indicado juicio, sino que se requiere de uno jurídico, que es el que corresponde a la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma y supone la conjunción de dos elementos inseparables: a) una facultad de exigir y, b) una obligación correlativa traducida en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia.»*

22. Consecuentemente, de la exhibición de las pruebas documentales ofertadas por la parte actora, a saber, los recibos oficiales de pago adjuntos a la demanda, así como los escritos por los que solicitó a las demandadas la expedición de copias certificadas de las cédulas de notificación de infracción impugnadas, se desprende, que el actor atendió las sanciones de multa derivadas de los actos impugnados, pues los recibos de pago acreditan que este realizó el entero ahí consignado, a la vez que en los mismos se precisan los conceptos de pago, es decir, las multas controvertidas, lo que en esta etapa del procedimiento, acredita que el actor sí resintió una afectación a su esfera patrimonial por el entero de las multas referidas, lo que actualiza, por lo menos indiciariamente el interés jurídico del actor, y por ende, demuestra en este momento procesal, la satisfacción del supuesto

7 Registro 2000098. Localización: [TA]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012; Tomo 5; Pág. 4489. III.2o.A.13 A (10a.).





---

Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

procesal para efectos de la admisión de la demanda, el cual podrá desvirtuarse o reforzarse en la secuela del juicio.

23. Lo anterior es así, pues la manera de acreditar el interés jurídico en el juicio en que se aduce la afectación patrimonial con motivo de la imposición de sanciones pecuniarias con motivo de infracciones viales, respecto de las que el actor aduce lisa y llanamente desconocer, pero que fueron pagadas por el accionante, debe demostrarse mediante la exhibición de los recibos de pago donde conste el pago de las multas impugnadas relativas a las infracciones viales controvertidas que dice desconocer el actor, todo lo cual sí se demostró por el accionante a través de la exhibición de los recibos de pago con números de registro A30785306, A30785307, A30785308, A28085994, A30790794, A30790793, A30790791, A30790792, A30791547, A30791546, A31765275, A31765274, A31768782, todos los cuales se encuentran expedidos a favor del actor como contribuyente, lo que satisface su interés en el juicio conforme al artículo 4 de la Ley de Justicia Administrativa, y por ende, no demuestra la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia aducida por la Sala Unitaria.

24. Al efecto, es aplicable por su criterio en cuanto a la procedencia del juicio con motivo del entero de las multas impugnadas, la jurisprudencia PC.III.A. J/65 A (10a.) del Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito:<sup>8</sup>

*«INFRACCIÓN A LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. EL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA DE NULIDAD EN SU CONTRA, INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE. Conforme al artículo 31 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, la demanda de nulidad deberá presentarse dentro de los 30 días siguientes a aquel en que: a) haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado; o b) se haya tenido conocimiento de éste; sin que ambos supuestos guarden un orden de prelación o sean excluyentes entre sí. Ahora bien, tratándose de infracciones de tránsito, se materializa el segundo supuesto cuando el afectado realiza su pago, porque con el recibo que obtiene por ese concepto, se da por enterado de la existencia de dicho acto, específicamente el número de folio de la multa, su monto, los datos de vehículo y la referencia de que se trata de una infracción a la*

---

<sup>8</sup> Registro digital: 2019095. Plenos de Circuito;10a. Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; PC.III.A. J/65 A (10a.); J; Publicación: viernes 25 de enero de 2019 10:26 h.



---

Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

*Ley de Movilidad y Transporte del Estado, que le permiten impugnarla en sede contencioso administrativa, sin que obste que haya desconocimiento de los fundamentos y motivos concretos que sirvieron de base para su imposición, así como de la autoridad emisora, en razón de que la Ley de Justicia Administrativa del Estado contempla diversos mecanismos para impugnar el señalado acto admisorio, en atención a los artículos 36 y 38 de esta última legislación, de los cuales se colige, en primer lugar, que en el evento de que la boleta de infracción impugnada no se notifique, el actor quedará relevado de la carga procesal de atender uno de los requisitos formales de la presentación de la demanda, consistente en allegar el documento en el que conste el acto impugnado y, en segundo término, que cuando las pruebas documentales no obren en poder del demandante, o cuando éste no haya podido obtenerlas (pese a que se trate de documentos que se encuentren a su disposición), bastará con señalar el archivo o lugar en que se hallen para que, a su costa, se mande expedir copia de ellos o se requiera su remisión y, para tal efecto, debe precisar el documento. Por tanto, el plazo de 30 días para presentar la demanda de nulidad contra una infracción a la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, en el caso aquí referido, inicia a partir del día siguiente al en que el afectado realizó el pago correspondiente.»*

**25. Consecuentemente, resulta procedente la admisión de la demanda en relación con los actos que la Sala Unitaria desechó en el acuerdo recurrido, por lo que, con fundamento en los artículos 89 y 93 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, se revoca el acuerdo impugnado solo en la parte que fue materia del presente medio de impugnación, para quedar en los términos que se precisan a continuación, debiendo prevalecer intocado dicho acuerdo en todo aquello que no fue materia del presente medio de defensa:**

«SEXTA SALA UNITARIA  
EXPEDIENTE VI-195/2017

ACTOR SEÑALA NUEVO DOMICILIO PROCESAL, **CUMPLE REQUERIMIENTO, ADMITE DEMANDA, EMPLÁCESE A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS,** AUTORIDADES CONTESTAN DEMANDA, CÓRRASE TRASLADO, CONCEDE TÉRMINO A LA PARTE ACTORA PARA AMPLIACIÓN DE DEMANDA, NO HA LUGAR A TENER CONTESTANDO DEMANDA A DIVERSA AUTORIDAD, EFECTIVO APERCIBIMIENTO, DECLARA REBELDÍA.



Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO, DOCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE.

Se tiene por recibidos en Oficialía [...]

Visto su contenido del segundo escrito, se tiene a la parte actora dando cumplimiento al requerimiento dictado por auto de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, pues mediante los la exhibición de los recibos de pago con números de registro A30785306, A30785307, A30785308, A28085994, A30790794, A30790793, A30790791, A30790792, A30791547, A30791546, A31765275, A31765274, A31768782, demuestra indiciariamente haber realizado el entero de las multas derivadas de los actos impugnados, por lo que se tiene satisfecho el requerimiento antes precisado y SE ADMITE la demanda en relación con los siguientes actos:

a) Cédulas de notificación de infracción con números de folio: 039193750192, 039232742887, 039231055398, 039245838190, 039231818421, 039250462018, 039254457434, 039255326562, 039256121581, 039256322943, 039257663094, 039258676688, 039262988171, 039263335740, 039234489712, 039235257360, 039238910471, 039228463370, 039200464354, 039233304654, y 039264047854.

b) La determinación de gastos de ejecución, actualizaciones, recargos, y multas por concepto de las cédulas de notificación de infracción, precisadas en el inciso precedente.

Se tienen como autoridades demandadas a los secretarios de Planeación, Administración y Finanzas, y de Movilidad, ambos del Gobierno del estado de Jalisco.

En relación con las pruebas documentales solicitadas por la parte actora a las autoridades demandadas, a través de los oficios sin número de fechas diecinueve de enero de dos mil diecisiete, los cuales obran en las hojas 53 y 54 del expediente de este juicio, con fundamento en los artículos 19-Bis, 36 y 56, segundo párrafo, de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, SE REQUIERE A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, PARA QUE DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS, INFORMEN A ESTA SALA UNITARIA respecto de la factibilidad de acceder a lo peticionado por el actor, y sobre si la entrega de la información solicitada es legalmente posible, y de ser este el caso, indique con precisión el número de fojas que integran los documentos solicitados, y el monto de los derechos que el solicitante deberá enterar



---

**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

previamente como contraprestación por la expedición de las copias peticionadas, como lo disponen los artículos 27, fracciones VI y IX, último párrafo, de la «Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2017», lo anterior, toda vez que como lo dispone el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, la expedición de las copias solicitadas por el actor se hará «a su costa».

En este sentido, en el caso de que el actor pueda obtener la prueba referida en el párrafo anterior, una vez que se determine sobre la factibilidad de su expedición y se determinen los derechos correspondientes para la entrega de las copias certificadas referidas, esta Sala Unitaria le requerirá al actor como oferente de la prueba por su exhibición en los términos del artículo 37 de la Ley de Justicia Administrativa, bajo apercibimiento de que de no presentar dentro del plazo de tres días, las pruebas o el recibo oficial que acredite el entero de los derechos que justifiquen la expedición de aquellas, dicho medio probatorio se tendrá por no ofrecido.

Con fundamento en los artículos 15, fracción I, inciso a), 36, fracción I y último párrafo, 42 de la Ley de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, con copia simple de la demanda, sus documentos adjuntos y del presente acuerdo, notifíquese a las autoridades demandadas para que dentro del plazo de diez días contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos dicha notificación, contesten la demanda en relación con los actos impugnados que el accionante les reclama, apercibidas de que en caso de no hacerlo así, o su contestación no se refiera a todos los hechos, se tendrán como ciertos los que no hubieren sido contestados, salvo que, por las pruebas rendidas o por hechos notorios, resulten desvirtuados.

Se reitera el requerimiento formulado en párrafos precedentes a las autoridades demandadas, para que dentro del periodo de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, se manifiesten sobre la expedición de las pruebas documentales solicitadas por la parte actora.

En otro orden de ideas, a sus autos el oficio suscrito por [...]

Así mismo, por recibido en Oficialía de Partes Común [...]

Con las copias simples de los escritos de contestación [...]

Por otro lado, a sus autos el libelo presentado [...]

Visto lo anterior, se da cuenta que la autoridad demandada [...]

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE [...]



**V. ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA FUNDAMENTAL,  
RENDICIÓN DE CUENTAS Y CONSTRUCCIÓN  
DE UN ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO**

26. Con fundamento en los artículos 6, 16 segundo párrafo, 17 y 116 fracciones V y IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 5 fracciones I y III y último párrafo, y 22 fracciones I, IV y VIII de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 6, 7 fracciones III, IV, VII y VIII, 91 segundo párrafo y 93 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 8º §1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, 4º §1 fracciones I y III y §2, y 15 §1 fracciones I, II, V y VIII de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios; y 4 inciso m) de la Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Jalisco; se hace del conocimiento a las partes que la presente sentencia es información pública fundamental, por lo que este Tribunal se encuentra obligado a ponerla a disposición del público y mantenerla actualizada, a través de las fuentes de acceso público al alcance de este órgano constitucional autónomo.

27. Lo anterior es así pues corresponde a la competencia constitucional de este Tribunal, la impartición de justicia especializada en dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y municipal y los particulares; así como imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales; materias cuyas disposiciones son de orden público e interés social pues se refieren a los mecanismos constitucionales para la consecución de los imperativos constitucionales del combate a la corrupción, la preservación de la seguridad jurídica, el fomento de la cultura de la legalidad y del Estado democrático de





---

**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

derecho, así como la rendición de cuentas de todas las autoridades por medio de la transparencia y el acceso a la información.

28. De esta forma, los artículos 70, fracción XXXVI, y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 8º §1 fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Jalisco y sus Municipios, al ser disposiciones de orden público y de observancia obligatoria, imponen a las Salas de este Tribunal la obligación de hacer públicas las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, incluso aquellos que no hayan causado estado o ejecutoria; sin que por ello se estime vulnerado el derecho de privacidad, pues el interesado en que se suprima la información que la ley clasifica como confidencial, podrá acudir a ejercicio de los derechos ARCO previsto en los artículos 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 45 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del estado de Jalisco y sus Municipios, lo anterior es así pues la finalidad de las disposiciones legales referidas con antelación es garantizar el acceso de toda persona a la información gubernamental, debiéndose favorecer el principio de máxima publicidad y disponibilidad de la información en posesión de los sujetos obligados, que sólo puede restringirse de manera excepcional bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad, con el fin de que no se impida el ejercicio de aquel derecho en su totalidad; estimar lo contrario conculcaría los principios constitucionales de transparentar y dar publicidad al actuar de las autoridades del Estado Mexicano y de los particulares involucrados voluntariamente en asuntos públicos, así como promover la rendición de cuentas en la construcción de un Estado democrático de derecho, basado en una cultura de la legalidad.

## **VI. DECISIÓN**

**29. Por lo expuesto y fundado, la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco, resuelve:**

**PRIMERO.** Se revoca el acuerdo impugnado, y se dictan los términos en que prevalecerá el mismo, como se establece en el párrafo 25 de esta sentencia.

**SEGUNDO.** Se admite la demanda.



---

**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

ENVÍENSE LOS AVISOS DE LEY, NOTIFÍQUESE POR BOLETÍN ELECTRÓNICO A LAS PARTES Y CON TESTIMONIO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, DEVUÉLVANSE LOS AUTOS A SU LUGAR DE ORIGEN, PUBLÍQUESE LA VERSIÓN PÚBLICA DE ESTA SENTENCIA EN EL SITIO WEB DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO Y, EN SU OPORTUNIDAD, ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, por unanimidad de votos a favor de los magistrados Avelino Bravo Cacho, (Ponente), José Ramón Jiménez Gutiérrez, (Presidente), y Fany Lorena Jiménez Aguirre, ante el Secretario General de Acuerdos, Sergio Castañeda Fletes, quien autoriza con su firma, con fundamento en el artículo 17 fracción V de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Jalisco.

**MAGISTRADO AVELINO  
BRAVO CACHO  
PONENTE**

**MAGISTRADO JOSÉ RAMÓN  
JIMÉNEZ GUTIÉRREZ  
PRESIDENTE**

**MAGISTRADA FANY LORENA  
JIMÉNEZ AGUIRRE**

**SERGIO CASTAÑEDA FLETES  
SECRETARIO GENERAL DE  
ACUERDOS**

JPBG/APCS

La Sala que al rubro se indica, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 20, 21 y 73 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; 3 fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco; Cuadragésimo Octavo, Cuadragésimo Noveno y Quincuagésimo de los Lineamientos Generales en Materia de Información Pública, que deberán observar los Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Jalisco; Décimo Quinto, Décimo Sexto y Décimo Séptimo de los Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los



## RECURSO DE RECLAMACIÓN 39/2021 SALA SUPERIOR

---

**Tribunal de Justicia Administrativa  
del Estado de Jalisco**

Sujetos Obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios; indica que fueron suprimidos de la versión pública de la presente sentencia (nombre del actor, representante legal, domicilio de la parte actora, etc.) información considerada legalmente como confidencial, por actualizarse lo señalado en dichos supuestos normativos. Firma el Secretario General que emite la presente.